Intervenciones:
Latin American and Caribbean Studies Working Papers for Social Change

Working Paper No. 1, September 2020

El paro de camioneros o cómo seguir criminalizando y vulnerando al pueblo Mapuche

Sebastián López Vergara*

[**Suggested citation: López Vergara, Sebastián 2020. "El paro de camioneros o cómo seguir criminalizando y vulnerando al pueblo Mapuche,** ***Intervenciones: Latin American and Caribbean Studies Working Papers for Social Change,*** **September, Working Paper No. 1, pp. 1-6.]**

Resumen
Este artículo sitúa el reciente paro de camioneros en Chile con la continua criminalización del movimiento Mapuche y las políticas públicas de "orden y seguridad" de los gobiernos de la post-dictadura. También el artículo explora cómo el gasto desproporcionado en las fuerzas policiales en Wallmapu (territorios Mapuche) ha creado mayor desigualdad e inseguridad tanto en la población Mapuche como chilena durante los últimos diez años.

Abstract
This article contextualizes the recent truck-drivers' strike in Chile with the continuous criminalization of the Mapuche movement and the "law and order" policies of the post-dictatorship governments. The article explores how disproportionate police spending in Wallmapu (Mapuche territories) has created greater inequality and insecurity in both the Mapuche and Chilean populations in the last ten years.

* * * * * * * * * * * *

El bloqueo de las carreteras organizado por una parte del gremio de camioneros ocurre cuando los casos nuevos de COVID-19 aún están por sobre 1.800 al día en Chile. Amenazando con paralizar la totalidad del país en este delicado escenario, los camioneros dicen representar las demandas de los chilenos a pesar de no levantar ninguna demanda relacionada a la extrema desigualdad creada por la pandemia. La mayor preocupación de los camioneros es simple: no más "atentados," "violencia" e "inseguridad" en Chile y la Araucanía.

Llama la atención que este bloqueo ocurra después del masivo apoyo a la huelga de hambre de los presos políticos Mapuche. Por esto, cabe preguntarse, ¿cuál es la violencia e inseguridad a la que se refieren los camioneros? ¿Qué relación tiene esta noción muy restrictiva de seguridad con el movimiento Mapuche de la democracia

* Estudiante doctoral, Facultad de Estudios de Cine y Medios, Universidad de Washington, Seattle, Estados Unidos.

posdictadura? Y ¿cómo la supuesta "mano dura" en la Araucanía ha producido más desigualdad y racismo contra el pueblo Mapuche en Chile?

Camiones en llamas, la criminalización del pueblo Mapuche y la democracia posdictadura

Las voces del gremio de camioneros han expresado, "queremos trabajar en paz en La Araucanía sin atentados incendiarios ni robos". Y, en realidad, lo que los transportistas que hoy bloquean el tránsito en las principales carreteras intentan aludir es camiones ardiendo en La Araucanía.

Producto de la cobertura de algunos medios, esta imagen se ha vuelto sinónimo de "terrorismo" y movimiento Mapuche después de la quema de camiones forestales en Lumaco en diciembre de 1997. Sin embargo, los incendios nunca fueron una táctica política de ningún colectivo político Mapuche. Por el contrario, el principal objetivo político del movimiento Mapuche siempre ha sido recuperar y cuidar la tierra para poder vivir tranquilamente.

Tal como relata Héctor Llaitul en el libro *Weichan*, la quema de esos camiones en los noventa fue una respuesta puntual a un diálogo que escuchó un grupo de personas de comunidades Mapuche cercanas al fundo Pidenco entre carabineros y operarios forestales, después de una fallida recuperación de tierras. Mientras descansaba, el grupo escuchó cómo trabajadores forestales y carabineros planeaban "hacer mierda" a los "indios *culiaos*" si es que los encontraban en algún camino.

"Ese diálogo nos enervó a todos. Escurrió una rabia a flor de piel", recuerda Llaitul. "Los Mapuche partieron y en el camino decidieron que, si encontraban un camión, lo quemarían." Clarifica el activista de la Coordinadora Arauco Malleco que "en el fondo, se trató de un acto muy rústico, que ejecutaron unos treinta hombres unidos por una sensación insuperable de rabia surgida del desprecio, del hambre, de la miseria de sus familias".

La recuperación de tierras aquel día en Lumaco tenía como objetivo poder suplir lo más básico para las familias Mapuche: agua. Los terrenos de Lumaco eran tierras sobreexplotadas que, como muchas de las tierras compradas para comunidades Mapuche por la CONADI a empresas forestales en la posdictadura, no tienen aguas subterráneas y donde nada podía (ni puede aún) crecer. La recuperación de tierras, por lo tanto, era una medida desesperada cuyo objetivo es asegurar un mínimo para poder vivir.

El Mercurio dijo que el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) estaba detrás de la quema de camiones en la Araucanía y se refirió a lo ocurrido con el siguiente titular: "MIR Habría Infiltrado y Organizado a Mapuches". Los políticos chilenos no tardaron en reaccionar y, tal como explica Llaitul, "vendría entonces una sucesión de hechos que el Estado descontextualizó y codificó como delitos".

Sin embargo, la Ley Antiterrorista no se utilizó en ese entonces. La práctica política de relacionar violencia, recuperaciones territoriales Mapuche y terrorismo en Wallmapu fue innovación del gobierno de Ricardo Lagos, cuando la ley antiterrorista fue aplicada por primera vez en 2003 contra el fallecido *longko* Pascual Pichun y el también *longko* Aniceto Norin, por sugerencia del político radical Juan Agustín Figueroa.

Para el 2016, la ley antiterrorista había sido invocada en 21 procesos involucrando alrededor de 127 personas, en su mayoría Mapuche. Gran parte de estos casos estaban relacionados con disputas territoriales en Wallmapu. Sin embargo, es importante recalcar que solo 9 personas fueron condenadas para luego 8 ser dejadas sin efecto por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La única persona condenada por la ley antiterrorista ha sido un informante de Carabineros, Raúl Castro Antipán.

No obstante, desde el gobierno de Lagos, el precedente de tratar de terrorista a todo movimiento político Mapuche ha resultado productivo para propietarios agrícolas, empresarios forestales y políticos. A medida que la recuperación de tierras usurpadas es periódicamente criminalizada con el uso de la ley antiterrorista, los gobiernos de la posdictadura han posicionado el discurso de la "ley, paz y orden" de tal manera que casi la única política "social" del estado chileno en Wallmapu es mayor presencia policial militarizada.

Hoy, los camioneros apuestan a continuar con esta política represiva cuando hablan de "paz y seguridad". Y, a pesar de que los ataques incendiarios a camiones han continuado, las ramas de inteligencia, investigación, y patrullaje de la institución policial nunca han logrado encontrar a los "culpables" de los "atentados" en la región con uno de los mayores gastos en vigilancia en Chile. Lo que sí se ha comprobado es que varios de estos "ataques incendiarios" han sido organizados por los mismos gremios de transportistas para cobrar seguros, tal como ocurrió en el 2015 y como lo confirmó Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones.

"Mano dura," militarización policial, pobreza y racismo en Wallmapu

El continuo esfuerzo Mapuche por recuperar tierras, por un lado, y las acusaciones de ataques incendiarios, por otro, sentaron el precedente que la "mano dura" es la única

respuesta posible a los conflictos sociales creados por la abismante desigualdad social en Wallmapu desde el retorno a la democracia.

A pesar de que Carabineros no detalla su gasto presupuestario anual por regiones, es posible ver que el año 2015, la institución policial desembolsó cerca de 1.900 millones de pesos para proteger a la industria agroforestal en las regiones del Biobío, Araucanía y Los Ríos según un oficio presentado al senado. Por su parte, las ganancias solo del holding agroforestal CMCP el año siguiente, controlado por el grupo Matte, fueron cercanas a los 81 mil millones de pesos.

El 2016 Bruno Villalobos, quien era entonces general director de Carabineros, presentó el informe sobre "Hechos asociados a la violencia rural" a la Cámara de Diputados. La institución aclaraba que el número de efectivos policiales en la Región de la Araucanía había crecido en un 65% desde el 2005 hasta la fecha. Y, aunque el documento detalla que "los eventos de violencia rural" habían bajado consecutivamente, la institución proponía un gasto tecnológico extra para la compra de "sistemas georeferenciados," drones, aviones no tripulados, y "radares de detección temprana" para proteger las faenas forestales a pesar de que carabineros ya utilizaba armamento de guerra en la zona, como fusiles M4 y subametralladoras UZI y MP5.

Con el objetivo de "reforzar la seguridad" en la Araucanía, el "Comando Jungla" le costó al estado chileno 340 millones de pesos solo en "capacitación de personal" de 23 efectivos policiales en Colombia entre los años 2007 y 2018. Miembros de este grupo policial especializado asesinaron al joven Camilo Catrillanca con un disparo de bala directo a su cabeza cuando él y un menor de 15 años manejaban un tractor en Temucuicui en noviembre del 2018.

Lamentablemente, niñas y niños Mapuche están expuestos continua y no excepcionalmente a la brutalidad policial en Wallmapu. Según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, 133 niños o adolescentes Mapuche habían sido vulnerados, mutilados o torturados por Carabineros entre el 2011 y 2017. Niños de 4 y 5 años en Temucuicui son continuamente atacados con gases lacrimógenos mientras están en la escuela y, como ocurrió el 2018 en Temucuicui, estudiantes Mapuche de 14 y 12 años fueron obligados a desnudarse en un control de identidad.

Los millonarios gastos en militarización, las abismantes ganancias agroforestales y el posicionamiento de un sector del gremio de camioneros en esta economía forestal militarizada no se han traducido en mejor calidad de vida en el sur de Chile. Al contrario, han contribuido a una mayor desigualdad social y a la inseguridad de la vida tanto del pueblo Mapuche como de chilenos en la región. Así lo ilustran los datos de la última encuesta CASEN del 2017 al evidenciar cómo en la última década los

índices de pobreza han crecido gradualmente en Chile, pero particularmente en la región de la Araucanía y en la población indígena en todo el país.

En la encuesta del 2009, el porcentaje de personas en situación de pobreza en la región de la Araucanía era 27.1%, casi el doble del porcentaje nacional (15.1%), mientras el porcentaje de pobreza en la población indígena en todo Chile era 19.9% y la no indígena era 14.8% ese mismo año. Después de casi una década, el porcentaje de personas en situación de pobreza es de 28.5% en la región de la Araucanía, el más alto de todo el país según la encuesta CASEN del 2017. Al mismo tiempo, la pobreza ha crecido a un 20.7% en Chile.

El porcentaje nacional de la población indígena en situación de pobreza subió a 30.2% para el año 2017. Es más, la población indígena en situación de pobreza extrema es 4%, el doble de la no-indígena (2.1%). Con la actual pandemia, es muy probable que estas cifras sean mucho más elevadas.

Es clave entender que la pobreza en Chile no solo está relacionada con la posición de ciertos grupos sociales frente a la producción y acceso a la riqueza de una sociedad; es decir la clase. La desigualdad que han creado las políticas estatales de "ley, paz, y orden" y de extracción medioambiental en Wallmapu vulneran cotidianamente las posibilidades de vida del pueblo Mapuche.

Esta vulneración es de tal magnitud que día a día el pueblo Mapuche enfrenta situaciones que los lleva a morir prematuramente en contraste con otros sectores de la población. Como en los casos de Camilo Catrillanca, Álex Lemun, Macarena Valdés, Alejandro Treuquil y muchos otros, estas muertes prematuras son causadas tanto por asesinatos por parte de agentes policiales y civiles como también por falta de recursos sociales y económicos, contaminación medioambiental, y explotación.

El concepto que describe esta experiencia social de desigualdad extrema es el racismo. En Chile, el racismo inseguriza cotidianamente la vida mapuche. En otras palabras, debemos entender que el racismo es la vulneración sistemática de las posibilidades de vida que particulares grupos (en este caso el pueblo Mapuche) enfrentan en el desigual acceso a recursos económicos, políticos y sociales frente a otros grupos sociales. Por lo mismo, el racismo como la desigualdad de clases son siempre problemas políticos y sociales, no solo de prejuicio individual.

Racismo, desigualdad, camiones y COVID-19

No es casual que los camioneros hayan decidido bloquear el tránsito de las carreteras mientras los presos políticos mapuche continúan una huelga de hambre que ya pasó los 100 días y que ha sido ampliamente apoyada por la población. Pero cabe destacar que

esta huelga de hambre está marcada por la amenaza del coronavirus ya que la pandemia ha tenido efectos desproporcionados en la población que está tras las rejas en Chile.

Aunque Gendarmería no ha publicado cifras que ayuden dimensionar el nivel de contagio en la totalidad de la población penal, dos casos recientes ilustran la extrema negligencia del estado chileno frente a un grupo de personas cuyas vidas son percibidas socialmente como indeseadas y prescindibles. Un caso es en Pozo Almonte, donde 40 internos dieron positivo por COVID-19 de un total de 60 personas privadas de libertad. Otro caso es en la cárcel de Rancagua, donde 78 de los 99 reclusos que fueron trasladados a ese recinto penal también dieron positivo.

Este punto sobre la cárcel, el coronavirus, la huelga de hambre Mapuche y el racismo delata cómo las extremas desigualdades que sufre el pueblo Mapuche cotidianamente y que vulneran sistemática sus posibilidades de vida se han extendido a otros sectores de la población en Chile durante la pandemia. Ante la imposibilidad de cuarentenarse por falta de recursos, la gran mayoría de la población activa chilena se ha visto obligada a continuar trabajando, exponerse al virus, y estar más cerca de la muerte. De hecho, la mayor cantidad de muertes en Santiago se encuentran en comunas con menores ingresos, como La Florida, Puente Alto, Maipú, Independencia, Recoleta, Santiago Centro y San Ramón.

Así, podemos ver cómo el racismo, o la extrema desigualdad social que precariza la vida del pueblo Mapuche, se ha extendido diferenciadamente en la población chilena durante esta pandemia. Esto no quiere decir que ambas experiencias sean iguales. Por el contrario, el racismo anti-Mapuche ha afectado desproporcionadamente al pueblo Mapuche por siglos. Pero, al mismo tiempo, el racismo estructura la totalidad de la vida social en Chile. Por eso, el racismo es un problema político que debe ser resuelto con recursos sociales, económicos y políticos con suma urgencia, no con una idea de seguridad muy represiva. En este escenario, los camioneros optan por insegurizar la vida de las grandes mayorías y continuar criminalizando al pueblo Mapuche durante la pandemia.